

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 5
O R D I N A R I A
MARTES 10 DE ENERO DE 2012

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con quince minutos del martes diez de enero de dos mil doce, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

El señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Proyecto de acta de la sesión pública número cuatro, ordinaria, celebrada el lunes nueve de enero de dos mil doce.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el martes diez de enero de dos mil doce:

Sesión Pública Núm. 5

Martes 10 de enero de 2012

II. 1. 151/2011

Amparo en revisión 151/2011 promovido por ***** contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y otras autoridades, consistentes en el traslado del Centro Regional de Readaptación Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, al Centro Federal de Readaptación Social número Cinco Oriente, en Veracruz. En el proyecto formulado por el señor Ministro Sergio A. Valls Hernández se propuso: *“PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***** , en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta sentencia. TERCERO. Se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del asunto”*.

El señor Ministro ponente Valls Hernández, que coordinó la comisión respectiva integrada por los señores Ministros Aguilar Morales, Aguirre Anguiano y él, expuso una síntesis de las consideraciones de su proyecto que sustentan las propuestas contenidas en los puntos resolutivos y aceptó las propuestas que le hicieron algunos señores Ministros en relación con el considerando quinto del proyecto, manifestando que estaba dispuesto a modificarlo o, en su caso, suprimirlo.

El señor Ministro Presidente Silva Meza indicó que este paquete de asuntos se relaciona con la interpretación del

juez de Distrito respecto del penúltimo párrafo del artículo 18 constitucional sin hacer referencia a la privación de libertad en prisión preventiva ni arrestos administrativos o judiciales.

Posteriormente sometió a la estimación del Tribunal Pleno los considerandos del primero al tercero, relativos respectivamente, a la competencia del Tribunal Pleno para conocer del asunto, la oportunidad de la presentación del recurso y la transcripción de los agravios que hace valer la recurrente, los que se aprobaron por unanimidad de once votos.

Por unanimidad de votos el Tribunal Pleno determinó que las votaciones que se tomen en este asunto sean definitivas.

El señor Ministro Cossío Díaz propuso determinar si la naturaleza del asunto es penal tomando en cuenta la entrada en vigor del artículo 5º transitorio del Decreto de Reformas Constitucionales en materia Penal, publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho, lo que trasciende a la competencia de las Salas de este Alto Tribunal e incluso a la aplicación de la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sostuvo que como consecuencia de la referida reforma, la judicialización de la ejecución de las penas está reservada a la materia penal, por lo que consideró necesario definir si estos asuntos serán competencia de la Primera o de la Segunda Sala de

este Alto Tribunal e incluso, tomar en cuenta las consecuencias procesales que ello implica.

El señor Ministro Valls Hernández coincidió con lo expresado por el señor Ministro Cossío Díaz dado que al promoverse los amparos que integran esta comisión, no había entrado en vigor la referida reforma, siendo relevante que los asuntos respectivos se resuelvan por este Pleno, máxime que aún no entran en vigor las leyes ordinarias derivadas de las respectivas reformas constitucionales.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea consideró que efectivamente la entrada en vigor de la respectiva reforma constitucional provoca la interrupción de la jurisprudencia vigente para integrar otra en la que se determine la competencia de los jueces en materia penal en sentido amplio y no exclusivamente la competencia de las Salas. Asimismo, consideró que la discusión relativa a qué Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación pertenecen de acuerdo a su naturaleza, está superada por el texto constitucional y con independencia de que se trate de un asunto en materia penal o administrativa, debía suplirse la deficiencia de la queja.

Sometida a votación la propuesta consistente en determinar si corresponde a la materia penal la ejecución de las penas impuestas en un juicio penal, se aprobó por unanimidad de votos; en consecuencia, a propuesta del señor Ministro Franco González Salas, por unanimidad de votos se determinó que este pronunciamiento toma en

cuenta que con motivo de la entrada en vigor de la referida reforma constitucional han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales de rubro “ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA PRO UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA” (Novena Época, Registro; 16764, Instancia, Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, Marzo de 2009, Materia: Penal, 1ª./J.128/2008, página 228) y “ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA PRO UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA” (Novena Época, Registro: 164742, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, Abril de 2010, Materia: Administrativa, Tesis: P./J. 37/2010, página 7), a las que deberán agregarse las notas correspondientes, sin menoscabo de que en el engrose de este fallo se desarrollen las consideraciones conducentes.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Pleno el considerando Cuarto del proyecto.

El señor Ministro Cossío Díaz precisó los temas que se abordan en el asunto estimando que el tema central consiste en que conforme al citado artículo 18 los sentenciados

Sesión Pública Núm. 5

Martes 10 de enero de 2012

“podrán” compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, lo que no es una facultad sino un derecho fundamental consistente en la reinserción. Asimismo indicó que para darle sentido a lo dispuesto en el precepto constitucional deberá entenderse como una condición potestativa de la autoridad administrativa de los centros penitenciarios, de lo contrario, estimó que cambiaría radicalmente la condición del proyecto.

Indicó que dicha obligación de la autoridad tiene dos excepciones: las personas a las que se les hayan aplicado penas por haber participado en delincuencia organizada y respecto de los internos que requieran medidas especiales de seguridad, estimando que se está ante una omisión legislativa que debe valorarse.

Consideró que no existen sentencias ni opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que puedan ser aplicables al caso concreto, estimando que se está ante una violación directa a los derechos fundamentales previstos en la propia Constitución.

La señora Ministra Luna Ramos estimó necesario corregir la incongruencia que presenta la sentencia recurrida en el sentido de que en ella el concepto de violación relativo a que el traslado afecta la adecuada defensa del reo, se respondió sin atender a lo efectivamente planteado al sostenerse que el quejoso refirió que con el traslado se restringe su derecho de defensa adecuada, debido a que su situación jurídica se encuentra pendiente ante un Tribunal

Colegiado, cuando en realidad se hizo referencia a una violación al derecho de audiencia refiriéndose a la situación del reo y no de quien se encuentra sujeto a proceso, ante lo cual el señor Ministro ponente Valls Hernández aceptó corregir la incongruencia advertida.

El señor Ministro Aguirre Anguiano señaló que en el proyecto se sostiene que se concreta la interpretación del principio de reserva de ley y del derecho de los sentenciados a compurgar una pena en una prisión cercana a su domicilio, lo que no consideró un derecho fundamental sino que guarda relación, en primer lugar, con la ejemplaridad para su comunidad, aunado a que se busca además su cercanía a sus familiares, considerando que el encontrarse en prisión no es contrario a la dignidad humana sino una consecuencia natural a una infracción a la ley penal.

Consideró difícil que en todos los casos haya lugar para los sentenciados en prisiones cercanas a su domicilio, tomando en cuenta que actualmente varias cárceles se encuentran saturadas, por lo que el hecho de compurgar una pena en prisión cercana al domicilio del sentenciado no puede considerarse como un derecho humano, por lo que el traslado a prisiones distintas por situaciones particulares no puede considerarse una violación a la dignidad humana.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia precisó lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 18 constitucional, considerando que en forma opuesta a lo sostenido en la consulta, su interpretación de ese numeral es en el sentido

de que fue voluntad del Constituyente que se respete como derecho fundamental que todo sentenciado purgue su sentencia en un lugar cercano a su domicilio, sin que deba interpretarse como una restricción a dicha prerrogativa que permita considerar que si la norma secundaria no establece en qué casos y bajo qué condiciones se puede ejercer ese derecho, signifique que la autoridad quede facultada para resolver discrecionalmente al respecto, recordando la exposición de motivos de la reforma referida y que las prisiones se han convertido en lugares en los que sistemáticamente se violan los derechos humanos de los reclusos, además de que en los penales de alta seguridad únicamente deberían encontrarse los sentenciados por delincuencia organizada o aquellos que requieran de medidas especiales de seguridad.

Estimó que en el caso concreto, el verbo “podrá” está dirigido a los sentenciados y no a las autoridades, al ser un acto volitivo del sentenciado pedir o no el traslado al centro penitenciario más cercano a su domicilio por lo que se trata de un derecho subjetivo del sentenciado y no una facultad discrecional de la autoridad. Precisó que la disposición constitucional consistente en que los sentenciados “tienen derecho a compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio en los casos y condiciones que establezca la ley” se puede ver desde dos puntos de vista, como la entiende el proyecto, en el sentido de que excepcionalmente los sentenciados puedan hacerlo,

o bien desde el punto de vista de que se trata de un derecho humano fundamental expresamente reconocido en la Constitución y son los sentenciados los que tienen el derecho respectivo, lo cual no implica que si la ley no establece los plazos o condiciones respectivos se pierda aquél.

Señaló que los únicos casos para restringir ese derecho son los expresamente previstos en la Constitución y algún otro plenamente justificado que se establezca en la ley. Recordó que ese derecho fundamental tiene como fin constitucional lograr la reinserción social de los sentenciados. Agregó no estar de acuerdo en aplicar la Ley de Normas Mínimas para resolver la situación de los quejosos, pues no es una ley reglamentaria del derecho fundamental del sentenciado reconocido expresamente en la Constitución.

Estimó que cuando la ley no establezca puntualmente en qué casos y cuáles son las condiciones en que los sentenciados puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, se torna de aplicación directa lo previsto en la Constitución y ante la solicitud respectiva se debe atender ese derecho fundamental con las únicas restricciones que prevé la propia Norma Fundamental respecto del crimen organizado y de la alta peligrosidad para reinsertar al sentenciado a su propia comunidad, por lo cual se manifestó en contra del proyecto coincidiendo con lo expresado por el señor Ministro Cossío

Sesión Pública Núm. 5

Martes 10 de enero de 2012

Díaz para otorgar el juicio de amparo, dejando para momento posterior lo relativo a los efectos.

El señor Ministro Pardo Rebolledo estimó que en el artículo 18, párrafo octavo, constitucional, se establece un derecho fundamental para quienes están compurgando una pena, lo que deriva de la ubicación de la norma respectiva y de que el nuevo sistema cambia de readaptación social a reinserción social, siendo ésta la finalidad de que se compurgue la pena en un lugar cercano al domicilio del sentenciado.

Señaló que este derecho es exigible, por ende, a las autoridades que actúan en la materia, sin compartir la propuesta del proyecto, especialmente la relativa al alcance del verbo “podrán”. Dio lectura a las respectivas consideraciones del proyecto y sostuvo que la argumentación destruye el derecho que otorga el artículo 18 constitucional, en tanto que el término “podrán” permite reconocer la realidad nacional, dado que es necesario verificar cuántos centros de reclusión existen en la República, recordando que el caso concreto versa sobre un sentenciado por un delito del orden federal.

Indicó que la regla general para conocer de un delito consiste en que será competente el juez del lugar en que se cometió, por lo que el término “podrán” puede entenderse como una expresión a favor del titular del derecho y no como una facultad discrecional de la autoridad.

Sesión Pública Núm. 5

Martes 10 de enero de 2012

Agregó que podrían ponderarse excepciones distintas a las indicadas en el precepto sin que signifique que no se tenga reconocido el derecho.

Dio lectura a la página ciento siete del proyecto señalando que se establecen dos condiciones de ley para el traslado del sentenciado: que exista convenio con el Estado respectivo y que la peligrosidad del individuo permita hacer el citado traslado, por lo que indicó que en el caso concreto, se está ante un caso inverso a estas hipótesis pues se trata de una persona que ya había sido trasladada a un centro penitenciario cercano a su domicilio, ante lo que se argumentó la despresurización de la prisión de Zacatecas, lo que no puede sustentarse en la Ley de Normas Mínimas ni en algún otro ordenamiento, por lo que propuso que se planteara el caso desde una perspectiva distinta analizando a detalle el principio de reserva de ley.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se manifestó en contra del proyecto y consideró que se está ante un derecho fundamental en primer lugar, por la ubicación del precepto en el capítulo relativo a los derechos humanos en la Constitución y, en segundo, porque el segundo párrafo del artículo 18 señala que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, estimando que la razón del párrafo que se estima violado deriva de la intención de propiciar que los sentenciados puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios

Sesión Pública Núm. 5

Martes 10 de enero de 2012

más cercanos a su domicilio para propiciar la reintegración y reinserción social.

Por ende, consideró que este derecho fundamental de poder compurgar la pena en un centro cercano al domicilio del sentenciado se relaciona con el relativo a la reinserción social.

Precisó que se está ante la voluntad del legislador recordando las dos excepciones relativas a la delincuencia organizada y a los internos de alta seguridad, considerando que podrían existir causas especiales gravísimas que fueran razonables para analizar si se justifica o no la excepción a este principio, lo que no se actualiza en el caso concreto.

En ese tenor, se manifestó a favor de conceder el amparo considerando que la autoridad no puede por sí determinar un traslado de reos en los casos no excepcionados por la propia Constitución, estimando que se trata de un derecho fundamental que aunque pueda ser modalizado o reglamentado, no pierde su carácter de derecho.

El señor Ministro Aguirre Anguiano consideró necesario reflexionar sobre la consecuencia de la falta de expedición de la ley a que refiere el artículo 18, párrafo octavo, constitucional. Estimó discutible sostener que dicho numeral prevé un derecho fundamental para lo cual previa lectura de éste, sostuvo que el término “podrán” es potestativo.

Consideró que dicho derecho no puede considerarse como constitucional, aunque se prevea en la Norma Fundamental que el sistema penitenciario se ordenará bajo la base del respeto a los derechos humanos pues dicha afirmación resulta neutra para la discusión del asunto, considerando que los sentenciados no son los que disponen de ese derecho y estimando dudoso el otorgamiento del amparo, en este caso, por la omisión advertida.

La señora Ministra Luna Ramos precisó que el párrafo octavo del artículo 18 constitucional no confiere una atribución discrecional para las autoridades, pues se refiere a los sentenciados, indicando a cuáles no será aplicable el respectivo derecho fundamental. Señaló que de la lectura integral de dicho numeral se advierte que sí hay párrafos dirigidos a las autoridades; sin embargo, el antes referido se dirige a los reos, por lo que se debe partir de una premisa diversa a la del proyecto.

Recordó que la palabra “podrán” ha sido objeto de diversas interpretaciones atribuyéndosele diversos significados dependiendo del contexto en el que se ubica. Estimó que no necesariamente debe entenderse como algo potestativo, sin que implique obligar a la persona a que realice determinada conducta, pero sí implica que se someterá a las consecuencias de no hacerla, señalando que ello se ha analizado cuando existe la posibilidad de hacer valer un recurso administrativo, sosteniéndose que al utilizar ese vocablo, ello implica que es potestativo interponerlo,

Sesión Pública Núm. 5

Martes 10 de enero de 2012

pero si se interpone, se debe atener el gobernado a las consecuencias de ello.

Indicó que en el caso concreto, la finalidad de la norma es propiciar la reintegración del sentenciado a su comunidad, lo que consiste en un derecho humano, para lo que recordó además, el contenido del párrafo segundo del artículo 18 que se estima violado, de donde sostuvo que debe interpretarse en relación con el reo y no con la autoridad.

Agregó que si bien se otorga el derecho respectivo, lo cierto es que se establecen dos excepciones, las que no son enunciativas, pues si bien se refiere a los delitos de delincuencia organizada, lo cierto es que en el caso de los reos que requieren medidas especiales, corresponde al legislador determinar cuáles son esos supuestos, debiendo tomarse en cuenta que actualmente no existe la ley respectiva.

Ante ello, consideró necesario atender a las circunstancias expresadas por las autoridades administrativas, las cuales justificaron los traslados en despresurizar el penal de Zacatecas, lo que a su parecer no encuadra en una medida especial de las referidas en la Constitución General, por lo que consideró que la inexistencia de la ley respectiva no impide analizar si las razones expuestas por la autoridad justifican o no el traslado.

En el caso particular precisó que el reo fue sentenciado por el delito federal de evasión de presos y, además,

Sesión Pública Núm. 5

Martes 10 de enero de 2012

acreditó tener su domicilio cercano al lugar donde compurgaba la pena, aun cuando el delito que se le sigue es federal, no local, y se encontraba compurgando su pena en un reclusorio estatal, sin que en el caso exista un convenio que permita que el sentenciado por un delito federal compurgue la pena en una cárcel estatal, pues el convenio celebrado con el Estado de Zacatecas no establece que la Federación traslade a los que hayan cometido un delito federal para que puedan compurgarlo en una prisión estatal.

En ese tenor, estimó correcto conforme al respectivo convenio, el traslado del reo que está compurgando un delito federal en una cárcel estatal, a una prisión federal; sin embargo, estimó que es incorrecto no haber determinado cuál es el penal más cercano a su domicilio, precisando que su ponencia hizo una búsqueda de la que concluyó que existen diversos reclusorios más cercanos que el de Veracruz, situación que no se tomó en cuenta para el traslado respectivo, por lo que estimó que, en todo caso, debió haberse cumplido la garantía de audiencia del sentenciado al no encontrarse en alguna de las excepciones contempladas en la propia norma.

Por ende, en el caso concreto no se actualiza lo previsto en el párrafo octavo del artículo 18 constitucional pues se trata de un sentenciado por un delito federal que compurgaba en un reclusorio estatal y será trasladado para despresurizar el penal en el que se encontraba, violándose la garantía constitucional relativa a trasladarlo al más

Sesión Pública Núm. 5

Martes 10 de enero de 2012

cercano a su domicilio, por lo que se manifestó por la concesión del amparo.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas manifestó compartir lo señalado por los señores Ministros en cuanto a la indisponibilidad de las autoridades administrativas para establecer requisitos que condicionen el derecho humano establecido en el párrafo octavo del artículo 18 constitucional consistente en la reintegración a la comunidad como una forma de reinserción social, por lo que reservó su derecho para formular, en su caso, voto concurrente.

El señor Ministro Aguilar Morales estimó necesario determinar si el precepto constitucional en comento contiene un derecho fundamental, pues de ser así no requiere para su ejercicio de una ley, en cambio si no es un derecho de esa naturaleza sí se requiere que el legislador regule el derecho secundario para saber cómo podrá ejercerse.

Consideró que no se está en presencia de un derecho fundamental ya que tampoco se regula como una facultad de la autoridad, sino como una petición o posibilidad para que el interesado lo solicite.

Estimó que de no solicitarse el derecho respectivo sería renunciable y dejaría de tener la naturaleza de derecho fundamental. Además si lo fuera, el texto constitucional no dejará la posibilidad de que el sentenciado lo pidiera, pues en todo los casos la autoridad tendría que realizar una

determinación más allá de la petición que presente el sentenciado, por lo que consideró que la forma idónea para lograr la reinserción social no es la compurgación de la pena en un lugar cercano al domicilio del reo, pues esto únicamente lo propicia mediante diversas cualidades o consideraciones específicas que permiten condicionamientos que no son propios de un derecho fundamental, sino de un derecho que se otorga en la Constitución y debe estar regulado en la ley reglamentaria correspondiente. Agregó que si fuera un derecho constitucional sería exigible con independencia de lo previsto en la ley correspondiente, sin que el artículo 18 constitucional así lo establezca, ni tampoco algún instrumento internacional.

Agregó que la ausencia de ley secundaria daría lugar a que no se pueda instrumentar o decidir, como sucedió en el caso de la solicitud realizada por el Ejecutivo para ejercer una atribución de este Alto Tribunal que está sujeta a la expedición de una legislación ordinaria. En el caso concreto, tendría que ser la Suprema Corte la que determinara cuál es el reclusorio más cercano al domicilio del sentenciado, lo que no se puede realizar ante la falta de ley reglamentaria, aunado a que si se tratara de un derecho fundamental sería necesario que en todos los casos la compurgación de la pena se realizara en un lugar cercano al domicilio.

Compartió lo señalado por la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas en cuanto a que el derecho fundamental en sí mismo es la reinserción social, en tanto

Sesión Pública Núm. 5

Martes 10 de enero de 2012

que el trasladarse a una prisión cerca del domicilio del sentenciado, únicamente es un medio legal para el interesado.

Por ello, en el primer punto consideró que no se está en presencia de un derecho fundamental consistente únicamente en que se compurgue una pena determinada en un lugar cercano al domicilio del sentenciado.

A las trece horas el señor Ministro Presidente Silva Meza decretó un receso y la sesión se reanudó a las trece horas con veinte minutos.

El señor Ministro Cossío Díaz sostuvo que en principio, debe determinarse si se está o no frente a un derecho fundamental, recordando que una de las modalidades del derecho a la integridad personal previsto en el artículo 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos es la readaptación social.

Consideró que en el caso, sí se trata de un derecho humano, primero, porque se le está otorgando conforme a la denominación tradicional un derecho subjetivo público a una persona para que lo haga valer frente a una obligación de un órgano del Estado el cual debe acogerse en la medida en que no esté dentro de una de las excepciones a la solicitud de compurgar su pena en un penal cercano a su domicilio; segundo, porque el propio Constituyente en la exposición de motivos le quiso dar el estatus de un derecho fundamental; y, tercero, la citada Convención señala que las penas

Sesión Pública Núm. 5

Martes 10 de enero de 2012

privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación de los condenados; lo que en nuestra legislación es acogido como reinserción social.

Recordó los momentos de la reforma constitucional, estimando que en materia de derechos humanos se sostuvo la necesidad del respeto a este derecho humano, sin que tenga que analizarse como una relación de un medio a un fin.

Consideró que no solicitar el referido derecho de traslado no implica renunciar a éste, sino únicamente ejercerlo o no, como puede suceder respecto de otros derechos, tomando en cuenta que se trata de un derecho que no es absoluto sino que tiene dos restricciones previstas en la Constitución.

Precisó la importancia de la situación que se vive en los centros penitenciarios actualmente, así como la obligación estatal de destinar los recursos necesarios para la reforma al sistema penitenciario, así como para la construcción y operación de su infraestructura, por lo que las limitaciones materiales existentes no pueden ser una razón para dejar de darle un sentido pleno a los derechos fundamentales, salvo que se quisieran entender como normas programáticas, sin que sea el caso, por lo que se pronunció en el sentido de que se trata de un derecho fundamental.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia sostuvo que sí se trata de un derecho humano fundamental, considerando que

en el caso concreto el derecho consiste en tomar la opción que la Constitución garantiza al reo. Recordó que en el artículo 20, apartado A, constitucional se señalan como derechos del inculpado el declarar o guardar silencio, el que se le reciban los testigos que desee presentar y la libertad bajo fianza, los que pueden ejercerse o no, siendo derechos humanos plenamente reconocidos.

En cuanto a la expresión “derecho humano fundamental”, precisó lo señalado por el señor Ministro Aguirre Anguiano así como por el señor Ministro Pardo Rebolledo, especialmente en cuanto a que el artículo 18, párrafo octavo, garantiza un derecho a los sentenciados.

Agregó que su propuesta de amparo no es por omisión legislativa sino porque este derecho se consagra en sede constitucional, reconociendo que puede ser limitado por la ley además de los dos supuestos señalados en la propia Constitución, en la inteligencia de que mientras no haya una ley, se debe aplicar directamente la Constitución.

El señor Ministro Aguirre Anguiano recordó lo indicado por el señor Ministro Cossío Díaz, señalando que no precisó en qué parte de la exposición de motivos se indica que lo previsto en el párrafo octavo del artículo 18 constitucional es un derecho fundamental. Además, si se tratara de una prerrogativa de esta naturaleza tendría que ejercerse sin taxativas que lo pudieran mediatizar al grado de que no existiera la posibilidad de elección.

Sesión Pública Núm. 5

Martes 10 de enero de 2012

En el caso de las penas previstas en el Código Penal estimó que la obligación de compurgarlas se vendría abajo con la interpretación que se propone.

Dio lectura al artículo 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estimando que no guardan relación con el tema abordado en el presente asunto.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea estimó más complejo determinar que el derecho materia de análisis no es un derecho humano fundamental. Consideró innecesario realizar una clasificación de derechos fundamentales, señalando que las expresiones realizadas son, en primer lugar, que no se indica en la Constitución que se trata de un derecho fundamental, lo que no es necesario pues deriva de la naturaleza de las normas y en el caso también de la ubicación del artículo 18 constitucional, estimando que más que un problema de topografía, es necesario analizar la naturaleza de lo que se estudia, pues se otorga un derecho subjetivo público para los sentenciados consistente en compurgar la pena en un lugar cercano al domicilio, lo que lleva implícito el derecho a solicitar su cumplimiento si la autoridad no lo acata, sin que del ejercicio de la opción para el particular dependa la obligación para la autoridad.

Por ende, consideró que se trata de un derecho y una obligación de la autoridad, lo que genera un derecho subjetivo público que es la relación más normal que subyace a un derecho fundamental, al existir un titular de un derecho que tiene la facultad de exigir su cumplimiento a una

autoridad. Estimó que no es un derecho renunciable, lo que es diverso a la posibilidad de ejercerlo, pues si así fuera se convertiría en una carga, siendo normal que los derechos se ejerzan o no, lo que no los desnaturaliza, como sucede en el caso del derecho de petición o de acceso efectivo a la justicia, siendo que en el caso se trata de una opción que tiene el titular del derecho, el cual puede no ejercerse por el quejoso sin que ello implique que sea renunciable.

Señaló que condicionar un derecho a ciertas condiciones de efectividad no le suprime su naturaleza, ni tampoco en caso de ausencia de ley tratándose de derechos.

Consideró que se está ante un derecho fundamental y que esta determinación trasciende en el lugar que ocupa en el orden jurídico, recordando que la propia Constitución obliga a interpretar cualquier conflicto a la luz de estos derechos.

La señora Ministra Luna Ramos estimó necesario distinguir entre un derecho humano y un derecho fundamental, precisando que el primero, consiste en el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo, en tanto que el segundo, es aquel derecho subjetivo públicamente reconocido oponible al Estado a través de determinados medios de defensa.

Mencionó que mediante la reforma al artículo 1º constitucional los derechos humanos se elevaron a derechos fundamentales, en tanto que el artículo 18 constitucional reconoce un derecho humano, lo que tiene su origen en que las personas privadas de la libertad deben ser tratadas respetando su dignidad buscando su reinserción en la sociedad, máxime que al estar establecido en la Constitución es un derecho fundamental que es oponible al Estado, sin ser absoluto al existir dos excepciones, una de las cuales permite que el legislador precise cuáles son los supuestos en los cuales se actualiza, concluyendo que se trata de un derecho humano fundamental de los referidos en el párrafo segundo del artículo 18 constitucional que puede ser oponible a través del juicio de amparo.

El señor Ministro Franco González Salas estimó que en principio compartía el proyecto parcialmente, ya que éste parte de reconocer en las fojas noventa y tres y noventa y cuatro que se trata de un derecho humano, aun cuando posteriormente no se analiza debidamente el problema. En primer lugar, sostuvo que se trata efectivamente de un derecho humano, siendo relevante que el Pleno no imponga una camisa de fuerza para otros casos que se puedan presentar ya que el derecho que asiste a quien está privado de la libertad conlleva en ocasiones una facultad para la autoridad, sin que ello permita desconocer el derecho en comento.

Recordó que la disposición constitucional se creó en mil novecientos diecisiete y se ha reformado en función de la protección de los derechos humanos y de la cultura indígena, considerando que se pretende que las penas se compurguen en los centros penitenciarios cercanos al domicilio del sentenciado.

Estimó que en este caso el sentenciado estando recluido en un reclusorio cercano a su domicilio fue trasladado a uno diverso, problema que debe atenderse.

Recordó lo señalado en el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, en tanto que el párrafo octavo de este precepto prevé: “El sistema penitenciario se organizará sobre las bases del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir”, señalando que entre los propios Estados se puede sancionar a sujetos que delinquen en su territorio pero que habitan en otro Estado, sin menoscabo de que pudieran solicitar que se les remita al centro penitenciario más cercano a su domicilio.

Indicó que el propio párrafo octavo prevé excepciones precisas, como lo es el caso de la delincuencia organizada y de los sentenciados que requieran de medidas especiales de seguridad.

Sesión Pública Núm. 5

Martes 10 de enero de 2012

Por lo anterior, estimó que se darán una pluralidad de supuestos que se irán presentando y cuya validez se analizará por el poder judicial.

Señaló que se está en presencia de un derecho humano cuyo núcleo esencial corresponde a los sentenciados, siendo el quid de este asunto el uso de la palabra “podrán”, lo que se ha considerado que va dirigido de manera central al reo que puede solicitar su traslado de un reclusorio, estimando que si se otorga el amparo será innecesario abordar otros agravios.

El señor Ministro Presidente Silva Meza señaló que la mayoría de los señores Ministros se han pronunciado en el sentido de que se trata de un derecho fundamental caracterizado por contar con determinada protección en la Constitución, especialmente a partir de las reformas de dos mil once, lo que se debe abordar en relación con la reforma constitucional en materia de ejecución de penas o del sistema penitenciario.

Recordó que existen diversas interpretaciones respecto del concepto “podrá”, precisando que corresponde a este Alto Tribunal la aplicación de las normas con la perspectiva de los derechos humanos y propuso que se votara respecto de la interpretación relativa a que se trata de una facultad discrecional que establece un deber para las autoridades y no desde la perspectiva de un derecho fundamental o derecho humano, para estar en posibilidad de determinar si

Sesión Pública Núm. 5

Martes 10 de enero de 2012

existe una violación directa al artículo 18 constitucional, mediante la interpretación que se hace en el acto reclamado.

El señor Ministro Valls Hernández señaló que a partir de lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 18 constitucional, se está en presencia de un derecho humano y propuso que se concediera el amparo en contra de la orden de traslado reclamada, por lo que indicó que elaboraría el engrose respectivo de acuerdo con las consideraciones vertidas en esta sesión.

El señor Ministro Aguilar Morales precisó que del intercambio de ideas que se ha dado ha coincidido con la propuesta del señor Ministro Presidente Silva Meza relativa a otorgar el amparo al tratarse de un derecho fundamental que es violado por el acto reclamado.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia propuso que únicamente se vote si el acto reclamado implica una violación del artículo 18 constitucional, dadas las diversas posibilidades de efectos del amparo.

El señor Ministro Presidente Silva Meza encomendó a la Secretaría General de Acuerdos la revisión de cada uno de los amparos en revisión que corresponden a esta comisión para determinar la incidencia de la incongruencia advertida por la señora Ministra Luna Ramos y, por ende, si se pueden resolver en el mismo sentido que el que se analiza, proponiendo continuar la discusión de los efectos del amparo en la próxima sesión.

Sesión Pública Núm. 5

Martes 10 de enero de 2012

El señor Ministro Cossío Díaz propuso que se llevaran a cabo las votaciones respectivas.

El señor Ministro Presidente señaló que los puntos resolutivos indicarían: “Primero. En la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida; y, Segundo. La justicia de la unión ampara y protege al quejoso en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta sentencia”, y propuso analizar en la próxima sesión el tema relativo a los efectos, lo que se aprobó por unanimidad de votos.

Sometida a votación la propuesta modificada del proyecto se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza. El señor Ministro Aguirre Anguiano votó en contra y reservó su derecho para formular voto particular.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto y los demás continuarían en lista, convocó a los señores Ministros para la Sesión Pública Ordinaria que se celebrará el jueves doce de enero del año en curso, a partir de las once horas y levantó esta sesión a las catorce horas con diez minutos.

Sesión Pública Núm. 5

Martes 10 de enero de 2012

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza, y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.